



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO 39 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**
j39pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Ref. ACCIÓN DE TUTELA No. 11001-4189-039-2021-01440-00
ACCIONANTE: PROSEGUIR TECNOLOGIA S.A.S., y PROSEGUIR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
ACCIONADO: COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACIÓN.

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela de la referencia, una vez rituado en legal forma el trámite correspondiente.

I. ANTECEDENTES:

1.- Hechos

Se exponen como fundamentos de la tutela, en síntesis, que la sociedad **PROSEGUIR TECNOLOGIA S.A.S.**, identificado con NIT. 830.025.104 y **PROSEGUIR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.**, identificada con NIT. 830.045.348-2, presentaron derecho de petición el día 3 de mayo de 2021 ante **COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACIÓN**, para tratar temas relacionados con información de los trabajadores de la compañía afiliados a la accionada para con ello validar las posibles inconsistencias; también solicitó información de los usuarios web para tramites en plataforma virtual y, certificaciones de los afiliados pertenecientes a la accionante, sin embargo, a la fecha no se ha emitido respuesta alguna.

2.- La Petición

Con fundamento en lo anterior, solicita se ampare su derecho fundamental de petición¹ y, en consecuencia, se ordene a la accionada **COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACIÓN**, resolver y notificar la respuesta que aborde cada uno de los puntos solicitados.

3.- Trámite Procesal

Una vez admitida la presente acción mediante auto de fecha 12 de agosto de 2021, se ordenó la notificación a la accionada **COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACIÓN**, a efectos de que ejerciera el derecho a la defensa sobre los hechos alegados, quien, dentro del término legal conferido, emitió pronunciamiento en la que manifestó: “... *El 03 de mayo de 2021 la accionante presento derecho de petición ante Colsubsidio solicitando información sobre sus afiliados para detectar inconsistencias...*” al respecto, precisó que: “[m]ediante comunicación de fecha 18 de agosto de 2021, Colsubsidio le notificó a la accionante respuesta a los

¹ Folio 4

interrogantes planteados en su petición enviada al correo indicado para notificaciones en la petición y acción de tutela...”.

Agregó: “... [se tiene entonces, para el caso que nos ocupa, que con la respuesta brindada el día 18 de agosto de 2021 se brindó una respuesta de fondo, clara y completa, acreditando el cumplimiento del núcleo fundamental del derecho de petición]...”, “...[c]omo corolario de lo anterior, la presente Acción de Tutela debe ser declarada improcedente, toda vez que se trata de un hecho superado y configurarse una carencia total de objeto. ...”

II. CONSIDERACIONES:

De la Acción de Tutela:

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 estableció que toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o contra particular frente al cual se encuentre en condiciones de subordinación. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela en consecuencia es viable, cuando quiera que un derecho fundamental constitucional se encuentre bajo amenaza o vulneración, situación que deberá ser demostrada o probada, por quien reclama su protección.

Problema Jurídico

En el caso objeto de análisis, el problema jurídico consiste en determinar si se ha vulnerado o no el derecho fundamental de petición de la accionante por no haberse dado respuesta oportuna, congruente y de fondo a la solicitud elevada el pasado 3 de mayo de 2021.

Del Derecho de Petición

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual se considera, básicamente, como la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva, a las autoridades correspondientes, y obtener de estas, una pronta y completa respuesta sobre el particular.

El derecho de petición, sobre el cual se invoca la protección constitucional, involucra dos momentos, *“...ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la administración para que ésta considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante.”*².

Lo anterior quiere decir que para la protección del derecho de petición, las autoridades públicas y los particulares, en los casos contemplados por la ley, deben

² Cfr. Sentencia T-372/95

no solamente proceder a imprimir a la solicitud puesta bajo su conocimiento el trámite interno que sea del caso para adoptar la decisión que consideren pertinente, sino que además su actividad se hace extensiva a la obligatoriedad de comunicar al peticionario la decisión que en uno u otro sentido haya adoptado, información que además debe producirse con prontitud, por cuanto está en juego la protección de un derecho fundamental.

De otra parte, hay que recordar que la respuesta a la solicitud, aun cuando debe ser pronta, oportuna y de fondo, no exige necesariamente una decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, pues una cosa es el derecho de petición y otra muy distinta, el derecho a lo pedido.

Sobre la temática la H. Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“En primer lugar cabe señalar que existe una diferencia esencial entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, en cuanto el primero de ellos, consagrado en el artículo 23 de la Carta, hace referencia a la facultad que tienen las personas de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una pronta y oportuna respuesta que debe hacerse conocer en debida forma al interesado, y que materialmente responda las inquietudes o asuntos planteados. Este derecho, en los distintos aspectos que lo componen y que han sido analizados por la doctrina de la Corte, puede ser objeto de amparo constitucional en sí mismo y con independencia del contenido de las peticiones”³.

Por otro lado, el derecho de petición elevado ante particulares está regulado en los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015, de la siguiente manera:

“Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.”

*“Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título. **Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. (...)**”*

“Parágrafo 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. (...)”

“Parágrafo 3°. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes”

En ese orden de ideas, formulada una petición ante una organización privada, el mismo se rige por las mismas reglas del derecho de petición ante autoridades públicas, de modo tal, que el particular queda sujeto al término para responder

³ Sentencias T-418 de 1992 (Sala Séptima de Revisión), T-575 de 1994 y T-228 de 1997 (Sala Quinta de Revisión) y T-125 de 1995 (Sala Tercera de Revisión).

peticiones en interés general y particular de quince (15) días hábiles; peticiones de información, diez (10) días hábiles; y peticiones de consulta treinta (30) días hábiles.

De la Emergencia Sanitaria – Covid-19

Con la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, entre otros, expidió el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, el cual en su artículo 5 que reguló lo concerniente a los términos para desatar los Derechos de Petición mientras dura la emergencia señaló:

*“Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. **Parágrafo.** La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.”*

Caso Concreto

En el caso bajo estudio se tiene que, la persona jurídica accionante aduce que el 3 de mayo de la presente anualidad elevó ante la entidad accionada **COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACIÓN**, petición para tratar temas relacionados con información de los trabajadores de la compañía afiliados a la accionada para con ello validar las posibles inconsistencias, también solicitó información de los usuarios web para tramites en plataforma virtual y, certificaciones de los afiliados pertenecientes a la accionante, todo lo cual fue corroborado por la sociedad convocada.

Ahora bien, analizando el presente asunto, delantamente observa el Despacho que la petente manifestó y acreditó haber radicado su petición el día 3 de mayo de 2021, data esta que debe analizarse bajo las previsiones del artículo 5 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo 2020, el cual modificó temporalmente el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos: *“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) **Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con***

las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.”

Así las cosas, en el *sub lite* se tiene que la accionada **COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACIÓN**, arrió a las presentes diligencias 3 anexos, entre los cuales reposa i) la respuesta al derecho de petición, de fecha 17 de agosto de 2021, ii) constancia del envío electrónico a la dirección: notificaciones-judiciales.co@prosegur.com, ivan.noguera@prosegur.com y Carlos.franco-pacheco@prosegur.com, direcciones electrónicas que corresponden con las informadas en la presente actuación y, iii) certificación de afiliados.

En dicha respuesta se le puso de presente a la accionante que: “... nos permitimos dar respuesta a sus inquietudes de la siguiente manera: ... [n]os sea enviado un archivo Excel el cual contenga el listado detallado y estado de afiliación de los trabajadores de la compañía que se encuentran afiliados a la Caja de Compensación Familiar, así como el detalle de sus beneficiarios. (...) **De acuerdo con su solicitud adjuntamos en formato Excel la información requerida.”**

Preciso cada pedimento de la siguiente manera: “[n]os sean enviados los respectivos certificados individuales de afiliación de los trabajadores de las compañías PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S y PROSEGUR TECNOLOGIA SAS, que se encuentran afiliados a la Caja de Compensación Familiar, incluyendo los beneficiarios. (...) **Adjuntamos en formato PDF las certificaciones con grupo familiar de los trabajadores vinculados a través de los empleadores PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S y PROSEGUR TECNOLOGIA SAS.”**

Frente al tercero: “[s]e nos indique el procedimiento para que, en adelante, la afiliación de nuevos trabajadores se pueda realizar de manera virtual. (...) **La Caja cuenta con 2 (dos) canales virtuales para la radicación de afiliaciones de trabajadores nuevos. Si se trata de trabajadores sin grupo familiar o aquellos que requieran acreditar el derecho a cuota monetaria, la empresa puede remitir el formulario debidamente diligenciado por cada uno de los trabajadores y los soportes correspondientes de cada caso, a través del correo afiliación personas@colsubsidio.com, respuesta de la radicación de la afiliación en un término de 3 días.”**

“La afiliación a través del portal de afiliaciones de empresas se encuentra habilitada para la afiliación de trabajadores y grupo familiar de manera individual o masiva para servicios, cuya afiliación queda registrada en línea. Posterior a la confirmación de esta afiliación el portal permite realizar el descargue individual o masivo de los certificados”.

Y, agrega: “[e]n caso de que la compañía cuente con usuarios registrados para el reporte de afiliaciones y novedades de manera ONLINE, nos remita un listado de estos usuarios. **La empresa cuenta con 3 usuarios administrador los cuales se relacionan a continuación: JORGE OSORIO OSORIO, GISELL VANESSA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA PICO y MONICA ROMERO BELTRAN usuario bloqueado. Si requieren la creación de nuevos usuarios es necesario el diligenciamiento del formulario adjunto y remitirlo al siguiente correo electrónico, mismo que gestiona dichas solicitudes: novedadesafiliaciones.linea@colsubsidio.com Si requieren la eliminación de alguno de los reportados es necesario remitir la solicitud al**

⁴ Folio 10.

correonovedadesafiliaciones.linea@colsubsidio.com y mencionar dicha intensidad. Para mayor información consulte la página www.colsubsidio.com.

A juicio del Despacho, el reseñado pronunciamiento involucra una respuesta de fondo frente a lo solicitado por la accionante puesto que se resuelve lo peticionado de forma clara, esto es, abordando cada petición solicitada, concernientes en información de los trabajadores de la compañía afiliados a la accionada para con ello validar las posibles inconsistencias, también solicitó información de los usuarios web para tramites en plataforma virtual y, certificaciones de los afiliados pertenecientes a la accionante y, es que la respuesta debe ser oportuna, suficiente y de fondo, independientemente que no se acceda a lo en ella reclamado.

Así las cosas, en el presente asunto si bien existió una vulneración al derecho fundamental de petición, pues la respuesta no se dio dentro del término legal; lo cierto es que se encuentra superado el hecho que dio lugar a la acción constitucional, puesto que las circunstancias que originaron la presunta transgresión al derecho invocado desaparecieron en el curso de la presente acción:

Respecto de la figura del hecho superado, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-085 de 2018 señaló:

“El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional”.

Es pertinente traer a colación la Sentencia T-045 de 2008, en la cual se establecieron los siguientes criterios para determinar si, en un caso concreto, se está o no en presencia de un hecho superado, a saber:

*“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2. **Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.** 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”*

Corolario de lo anterior, se desprende de la documental obrante al paginario que el derecho de petición ha sido satisfecho en debida forma por la accionada, por lo que se tendrá como hecho superado y se negará el amparo constitucional solicitado por la actora.

III. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO 39 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

ACCIÓN DE TUTELA No. 11001-41-89-039-2021-01440-00

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional reclamado por **PROSEGUIR TECNOLOGIA S.A.S., y PROSEGUIR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.**, a su derecho fundamental de petición, por la presencia de un hecho superado, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a los extremos de la acción en forma personal o por el medio más idóneo o expedito posible. **Entréguese copia del presente fallo a la accionada.**

TERCERO: Si la presente decisión no fuere impugnada dentro de la oportunidad legal, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional, para su eventual REVISIÓN. Ofíciense. Déjense las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado Por:

Cristhian Camilo Montoya Cardenas
Juez Municipal
Juzgados 39 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples
Juzgado Pequeñas Causas
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6d0e0cfca2791e5672259f3866005dd989505bb72ea95d05a2b367d245b49319

Documento generado en 19/08/2021 04:18:56 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>